

España 1963

EXAMEN DE UNA SITUACION

por Dionisio Ridruejo

«Nada se hará en España en tanto los obreros y los patronos, los intelectuales y los hombres de religión, los campesinos y los técnicos no sientan y «vivan» que la política no puede ser algo que se hace sobre ellos y por fuera de ellos sino el resultado de sus propias fuerzas puestas en movimiento y de su responsabilidad asumida.»

ESTRUCTURA DEL FRANQUISMO

El año 1962 ha sido en España —de hecho— un año movido. Sus últimos meses y los primeros del año 1963 han sido —de palabra— unos meses reactivamente inquietos. El pluralismo de las actitudes, las opuestas previsiones de futuro, las audacias y retrocesos, las contradicciones en el interior del régimen sugieren la idea de una crisis. Pero hablar de crisis respecto a una situación política es decir algo muy poco preciso. Será necesario analizar el conjunto de hechos y manifestaciones que quedan detrás de esa palabra para obtener una imagen real.

Para ello nos parece aconsejado comenzar por el principio y tratar de comprender, en sus líneas generales, la situación donde las inquietudes se producen. Sabemos que, a raíz de la guerra civil, la estratificación tradicional y económica de la sociedad española se complica con una nueva estratificación sociopolítica que, en el caso de algunos grupos, significa una sección interna. Queda abajo la parte, el estrato, derrotado en la guerra civil. Si el conjunto electoral de 1936 indica algo, aquél representa el 50 por 100 de la población. Encima queda el estrato vencedor — la otra mitad acaso, con sus anexiones oportunistas — que durante algunos años representa la masa de maniobra del nuevo régimen, la base poco homogénea de lo que, por falta de palabra ideológica suficiente, hemos de llamar el franquismo.

A efectos de caracterización diremos que, si el estrato que queda sometido comprende en su mayoría a la clase obrera, el estrato «cabalgante» comprende, en su mayoría también, a la burguesía propietaria. Uno y otro estrato se reparten en proporciones desiguales los otros grupos sociales seccionados internamente por la guerra, tales como la clase intelectual, la pequeña burguesía profesional o el campesinado modesto. La naturaleza del sistema político resultante —un sistema jerárquico, sin opinión y sin vías representativas— favorece la pausada neutralización del estrato dominante y la ley de la vida, que es ley de necesidad, va poco a poco imponiendo la relación de los dos estratos y, en cierta medida, recomponiendo la homogeneidad de los grupos sociales divididos. De ese modo, en la sociedad española tienden a hacerse «puros» otra vez los distanciamientos «naturales» de los grupos que portan intereses contrapuestos y a los que la presión del sistema impide lo que hemos llamado alguna vez la «cooperación conflictual». Poco a poco, por debajo y por encima de esos estratos que tienden a refundirse y a readquirir su carácter tradicional clasista —aunque no lo consigan del todo—, van quedando mejor definidos y aislados los estratos politizados: el que soporta «con paciencia» la persecución y se resiste a la aceptación de la derrota y el que titulariza la función de

dominar e incluye a las clientelas organizadas o disponibles —y en cualquier caso activas— del sistema.

El esquema necesita un par de precisiones más. De los grupos sociales que tienden a recomponer su homogeneidad, algunos tienen licencia y posibilidad de actuar como grupos de presión. Otros, por el contrario —como la clase obrera, el grupo intelectual y el grueso de la clase media— sólo podrán funcionar como tales en raros momentos de emergencia, sin autorización y con riesgo probable. Por otra parte, el estrato politizado al que debemos limitar el calificativo de franquista, antes usado genéricamente, dista mucho de ser homogéneo como, por ejemplo, lo es en los regímenes totalitarios. La heterogeneidad afecta al mismo «Movimiento nacional» o Partido único del régimen, pero además hay fuera de su encuadramiento otros grupos, algunos de los cuales, por su carácter social arraigado, van tomando también el carácter de grupos de presión.

En realidad, lo más interesante del proceso que ha ido sufriendo el régimen español —por lo que se refiere a nuestro tema— está en esa progresiva diferenciación y concretización de los diversos grupos que conviven en su estrato politizado, cuya reducción va siendo proporcionalmente inversa al crecimiento —cada vez más complejo— del estrato politizado contrario, sumergido e insumiso, al que se han ido añadiendo cantidades nuevas procedentes o no del sector opuesto. Veremos luego el diverso grado de representatividad, y por consecuencia la posibilidad de contar como grupos de presión, de los diversos grupos franquistas. Algunos de ellos, los que gozan de un *status* político formal, son grupos encapsulados en sí mismos, cuyo valor dependerá del valor de atracción de su utopía ideológica, porque no se vinculan directamente a los intereses de un grupo social básico bien determinado. Otros, en cambio, son auténticos mensajeros de ese tipo de intereses, con los que funcionan en una relación que diríamos de capilaridad que les permite mayor oportunismo ideológico.

No se piense, con todo esto, que el franquismo consiste en un sistema de representaciones formalmente regulado, ni siquiera por la vía sustitutiva e inversa que es característica de los sistemas de partido único. Aquí no hay representaciones sino solamente influencias o presiones. El Partido único, por ejemplo, no es, como en los sistemas totalitarios, el instrumento político de organización de la vida colectiva que lleva orgánica y jerárquicamente la voluntad del poder a todos los engranajes sociales. Ya hemos dicho que coexiste con otros grupos. Por otra parte, el poder —esto es, el Gobierno— no está de ninguna manera inscrito en él como el corazón en el riego sanguíneo: los ministros actúan directamente sobre las piezas sociales más diversas. Tampoco y mucho menos es un detector y transmisor de

las exigencias de la sociedad al Gobierno. Con la sociedad no tiene más que algunas relaciones coactivas, en terrenos delimitados. Es un instrumento parcial de misión imprecisa. Su estructura es jerárquica, sus cuadros dirigentes se nombran desde arriba. No dispone de medio legal regular e idóneo para conocer, expresar y elevar al Gobierno ni siquiera las opiniones o acuerdos de sus propios militantes. Los otros grupos del franquismo ni siquiera tienen, como tales, cuerpo orgánico regular: no son organizaciones autorizadas y su realidad visible se reduce a los equipos que pueden emplear en la administración o mantener al frente de centros culturales, medios de difusión u organizaciones económicas.

El pluralismo del sistema es un hecho que procede de la complejidad originaria del franquismo, pero tal hecho no está institucionalizado de ningún modo. En realidad, los propios grupos integrantes del partido único tienen que funcionar —cuando funcionan para producir expresiones o presiones diferenciadas— fuera de su encuadramiento y, en tal sentido, lo que en el Partido único queda vivo se rige por las mismas leyes de informalidad de los otros grupos franquistas que sólo gozan de reconocimiento tácito. Los centros de iniciativa, de que se viene hablando en los últimos meses y seguiremos hablando nosotros —izquierda falangista, monárquicos, Opus Dei— son, a efectos de la realidad oficial, simples conjuntos de «caballeros particulares» tolerados por la autoridad.

En este estrato, sin embargo, se concentra la vida política tolerada. Pero hay que decir aún que, del mismo modo que este estrato no representa al estrato social básico más que por ciertos contactos capilares muy reducidos, tampoco se ajusta funcionalmente con el estrato más pequeño y más alto de la vida política oficialmente funcionante, esto es, con las instituciones formales del sistema. Y ello, fundamentalmente, porque tales instituciones y tal sistema son una ficción. En rigor —ya es hora de decir lo obvio—, al cabo de veintisiete años, el régimen político español no ha sabido superar el esquema simplicísimo de la dictadura personal. Todo el sistema es un enorme arbitrio y, si el poder personal conoce algunos límites, estos hay que buscarlos en los intereses de los grupos de presión —cualquiera que sea el carácter de éstos— y no en el formalismo de las instituciones públicas.

El dictador ha sabido aprovechar, para gozar de una libertad desmedida, tanto la complejidad y contradicción de los grupos de asistencia al sistema como la enorme cantidad de elementos neutros incluidos en el mismo.

Se puede hablar del Partido único y de los Sindicatos, de las Cortes, del Consejo del Reino y hasta del Reino a secas, que es una bonita palabra arcaica. Incluso puede leer-

se una descripción formal del mecanismo que pondría en relación todas estas instituciones para producir la sucesión del mando personal. A nadie se le oculta, sin embargo, que tales cosas son ficticias, ornamentales o, a lo sumo, instrumentales. Del Partido único ya hemos hablado. Los Sindicatos —instrumento del instrumento— son formas burocráticas organizadas jerárquicamente. Las Cortes no son la representación de los órdenes sociales —familiar, municipal, profesional— a que se refiere su teoría, sino un conjunto de individuos cuya investidura depende de su fidelidad y que en un estado de libertad no contarían ni un minuto con la aprobación de los cuerpos sociales hipotéticamente representados. El Consejo del Reino, cuya función es de pura emergencia, podría tener en su día la autoridad que le presntasen las instituciones no políticas que algunos de sus miembros representan automáticamente: la Judicatura, la Universidad, la Iglesia, el Ejército. En la práctica, esta última es la única representación que puede considerarse auténtica y comprometida. Pero ¿para qué necesita el Ejército la pantalla del Consejo del Reino? En realidad, sólo en el Ejército se piensa cuando —dentro del propio régimen— se calculan las posibilidades de futuro.

Este es el punto clave: atravesando verticalmente todos los estratos del franquismo y pisando con firme fuerza coactiva sobre la base social neutra o neutralizada, un instrumento de poder real, neutro a su vez, constituye el soporte principal e insustituible de un poder personal absoluto. El otro instrumento neutro e institucionalizado del Estado —la administración— vive igualmente bajo el precepto de la fidelidad y no tiene posibilidades políticas de ninguna especie fuera de la obediencia.

Naturalmente, ninguno de los grupos políticos del sistema ignora que el Ejército es el instrumento real del poder y que ninguna variación se producirá mientras no se produzca en ese centro. De ahí el carácter de pura instancia que, por lo general, tienen siempre los movimientos de esos grupos y —en alguna medida— los de la oposición menos alejada del sistema.

LAS PRESIONES DEL TIEMPO

Si repasamos ahora nuestro esquemático análisis y le añadimos algunas notas, más de ambiente que de estructura, comprenderemos cómo y por qué el estado de inquietud, la actitud insatisfecha e instantánea, han tenido que acompañar la vida de los grupos asociados en el sistema desde muy temprano y por qué esa inquietud no tuvo más remedio que ir creciendo hasta adquirir el carácter crítico y un tanto impaciente que se viene revelando en los últimos meses.

El argumento principal de esas inquietudes es la provisionalidad —una provisionalidad que, paradoja española, viene durando lo que no duraron las instituciones mejor planeadas— que caracteriza, irremediamente, a las situaciones de poder personal institucionalmente pobres e ideológicamente imprecisas. Hasta hace poco tiempo esta inquietud era exclusiva y particular de los grupos políticos y sólo vagamente participaban en ella los elementos y las masas neutras propicias al sistema. Tampoco, lógicamente, participaba el Dictador —ni participa aún, según veremos— porque para él es seguridad y libertad lo que para los otros es riesgo y limitación. El puede pensar que la indefinición del sistema le ha permitido toda suerte de maniobras y mimetismos según el soplo de los vientos y que sólo la precariedad del título con que todos los grupos de ideología están en el régimen garantiza la plenitud de su arbitrio. Esos grupos no pueden pensar lo mismo. Por lógica propensión han tenido que aspirar a que el sistema realizase su ideología —fuese suyo— y a que los intereses que los inspiran queden defendidos a plazo más largo de lo que puede durar una persona física. La desazón ha tenido que aumentar forzosamente al aproximarse el plazo de la extinción probable de aquella persona, pero más aún por la evidencia, cada vez más presionante, de las notas de situación que seguiremos considerando.

El estrato social sumergido sigue ahí, inasimilable y sin posibilidad alguna de ser representado en el sistema; con toda la clase obrera dentro y con fragmentos —antes flotantes— de otros grupos que se le han ido asimilando en vez de suceder lo contrario: la mayoría de la población de las Regiones derrotadas como tales, gran parte de la clase intelectual, porciones indeterminables de clase media empobrecida y grupos de las nuevas generaciones que se inclinan a buscar tradición en las ideologías de la «causa perdida». Junto a esto, el estrato que un día fue vencedor y quedó identificado con el franquismo aparece ahora progresivamente despolitizado y devuelto a sus intereses de grupo, que ya no siempre coinciden con los intereses de la situación. Encima, el conjunto de los grupos politizados con sus diferenciaciones cada vez más acusadas y sus contradicciones cada día más vivas, sufre el imperio sordo del pluralismo indiscutible de la base social y disminuye de volumen, mientras, por el contrario, gana volumen, complejidad e intercomunicación el otro estrato político compuesto por el sector que un día quedó al fondo y por el que penetra, con nuevas previsiones, el «continuo» social. Y en el centro de todo esto, un Régimen sin instituciones, pendiente de la vida de una persona o de la decisión de una fuerza neutra que no tiene o no expresa proyectos ni pensamientos políticos porque eso no es lo suyo.

Pero hay algo más grave: la base social al volver a su «estado natural» denuncia en sus propios conflictos, latentes y a veces presentes, las insuficiencias de la realidad socioeconómica sobre la que se ha trabajado poco y con mala orientación conservadora y pone de manifiesto las propias carencias expresadas en los hábitos de corrupción e irresponsabilidad que son el corolario de un largo desentrenamiento civil. Todo ello sin que el sistema pueda hacerse cargo regularmente de esos conflictos que se ve obligado a negar, ni pueda combatir la atonía que es base de su propia libertad de acción.

Sin embargo, la circunstancia más constrictiva es otra, que tendría un valor accidental si presionase sobre un sistema seguro, representativo de una realidad social fundada en la satisfacción, pero que en las condiciones señaladas se convierte en factor decisivo. Me refiero a la discrepancia formal y sustancial que existe entre la figura y los procedimientos del régimen español y los modelos de organización y comportamiento político reafirmados o reproducidos en la mayor parte del mundo después de la segunda guerra mundial. Me parece ocioso describir esos modelos, que admiten, sin duda, una porción de variantes correspondientes a los niveles, características y tradiciones de los diversos pueblos. Baste decir que, dado el modo ideológico de plantearse la contienda pasada, ellos mismos no pueden menos de considerar a España, anclada en una situación que recuerda los regímenes vencidos, como un cuerpo extraño. Sumariamente podría decirse que España representa la tentativa de defender el sistema económico que domina en la mitad del mundo con los procedimientos autoritarios usados en la otra mitad para imponer el sistema contrario. Lo que sería bastante para explicar que tanto el sector occidental como el oriental deban considerar la situación de España como un testimonio molesto que de algún modo les afecta como una contradicción. Pero es que además, y como hemos dicho, el régimen español —que inmoviliza una estructura social clasista— es algo mucho menos serio y vigoroso, en cuanto a la forma política, que las dictaduras revolucionarias monolíticamente imperantes con la asistencia de grandes masas, y como sistema socioeconómico es algo infinitamente deficiente respecto a los modelos del capitalismo evolucionado y dinámico del mundo occidental, cuyos grupos sociales luchan y se concertan con una fuerza de interacción que el estancamiento español hace impensable. En rigor, en un mundo donde dominan las democracias capitalistas en régimen de proceso abierto y las dictaduras revolucionarias de gran ambición futurista, España representa un modelo de dictadura contrarrevolucionaria y conservadora empeñada, hasta donde es posible, en mantener el proceso social en suspenso. Lo que, para el progresismo medio de occidente

o de oriente, representa un ejemplo lamentable, y para España misma un rezagamiento que, en pocos años más, podría resultar insalvable.

Hasta 1945 esta circunstancia pudo considerarse indiferente, a pesar de que sabemos por prueba documental que los regímenes europeos en cuyo proyecto histórico parecía orientado el franquismo, consideraban a éste como una situación a revisar porque aun para ellos resultaba arcaica. Después de 1945 la cosa fue distinta y, de hecho, la España-pueblo no ha dejado de probar un solo día las disminuciones de posibilidad que se le imponen por consideración a la España-régimen. En tanto Franco y su gobierno han podido presentar esa presión como un capricho del imperialismo ideológico de los vencedores o como un modo de pervivencia de la leyenda negra antiespañola, la opinión ha ido entreteniéndose y los grupos a que nos venimos refiriendo han podido desentenderse de la cuestión. Pero más pronto o más tarde tenía que llegar el momento en que la presión externa o periférica se transformase en presión interna o vertical. Las razones han sido varias, empezando por la mendacidad desprestigiante con que el Gobierno ha hecho frente a las circunstancias, autoafirmando al régimen español como solución original, puntual, institucionalizada y asistida por la nación —cosas que no corresponden a los datos reales que todo el mundo conoce— y procurando definirlo como la más previsor de las variantes del propio sistema democrático. Aun suponiendo más rudimentaria de lo que es la cultura política de los españoles, ninguno de ellos ignora que no hay democracia de ninguna clase allí donde —habiendo pluralismo social— no hay vías de representación, ni límites ni plazos para el poder, ni garantía alguna para el *status* de los individuos y los grupos sociales, ni posibilidad legal de plantear los problemas o de obtener información. Del mismo modo que basta mirar la situación respectiva de las clases sociales en España para saber que no hay —es otro tema de la autodefensa— realización revolucionaria de ninguna especie.

Pero ha habido más. Mientras el régimen pretendía autoafirmar su originalidad y difundir por el país un ambiente de resistencia, estaba ya cediendo a las presiones exteriores. Y no sólo en la forma de mimetización retórica a que acabamos de aludir sino en cuestiones de hecho nada livianas. Desde 1948, aproximadamente, el Gobierno ha procurado tener en primera línea los equipos que podían inspirar menos recelos al mundo occidental o significar ante él una garantía de liberalización; equipos cuya renovación ha coincidido luego con coyunturas de política exterior bien determinables, mientras sólo en horas críticas se volvía a apelar a los equipos «fieles» de la primera hora. Ha cedido el régimen gravemente concluyendo un pacto de arrendamiento

con América, esto es, con el dispositivo de la defensa occidental, que se organiza bajo la bandera ideológica significada por las palabras «mundo libre». Ha cedido también en la política económica, bajo la presión de informes y recomendaciones internacionales que significaban condiciones para la obtención de créditos, procediendo a la liberalización y a la estabilización, semienterrando las pretensiones de autarquía, recortando las alas al heterodoxo Sector Público, limitando las medidas de dirigismo que representaba para él grandes conveniencias porque eran fuentes de privilegio y coacción. Las palabras son palabras y los hechos son hechos. Las palabras han sido, a veces, altaneras. Los hechos han sido, con frecuencia, humildes. ¿Y por qué la opinión del país debería ser eternamente menos realista que el Gobierno?

Pero la transformación de la presión externa en presión interna se ha hecho irresistible cuando la primera ha perdido su carácter de presión —en el pleno sentido de la palabra— para convertirse, de algún modo, en incitación. Esto ha comenzado a pasar al iniciarse las primeras integraciones que habían de dar realidad en Europa a las instituciones del Mercado Común, que, a su vez, preludian un movimiento de integración política. Los modelos políticos y sociales a cuya adopción se resistió el régimen español —oponiendo el suyo como réplica— han ido penetrando la imaginación de los españoles con toda la fascinación propia de un pueblo que ha despegado ya hacia las perspectivas del bienestar pero que se ve aún a distancia de ellas, mientras las ve realizadas en pueblos de la misma familia cultural. La idea de que la relación con ese mundo, la alineación con esos modelos, la participación en el movimiento de la integración europea, son los recursos que convienen para conquistar formas de vida más amplias, ha ido imponiéndose progresivamente a todos los grupos sociales. A partir de ahí la reiteración del Gobierno sobre el valor superior de su propio sistema se ha convertido en un error psicológico colosal, porque la demostración del fraude está a la vista. Si invocaba razones de seguridad o de necesidad —porque el pueblo español está aún dividido— o hablaba de niveles insuficientes de educación y desarrollo, se condenaba a sí mismo por su inutilidad a lo largo de veinticinco años, o acreditaba la solución revolucionaria que, como antes se dijo de la guerra, es el remedio de las situaciones que no tienen remedio.

Anotemos de paso que el crédito de esa solución extrema no ha dejado de crecer en ciertos sectores sociales del país a favor, sin duda, de sus atractivos ideológicos pero al favor también de la «apología negativa» que para amenazar al pueblo español y poner en entredicho los modelos

occidentales ha constituido una de las constantes propagandísticas del Gobierno (1).

Pese a ello puede decirse que la aspiración a una España europea, acomodada al modelo medio de Europa, está tan generalizada como la aspiración a conquistar los niveles de vida que en esos modelos se ofrecen. Que para algunos la aspiración parezca temeraria y para otros insuficiente es cosa normal. Pero incluso para estos últimos va apareciendo cada día más claro que la posibilidad de trascender esos modelos actuales —por ejemplo en el aspecto de la democratización económica real— es empresa harto menos costosa, en un campo experimental continuo, del tamaño y con los recursos de todo un continente, que en el campo reducido de un país marginado donde la transformación revolucionaria se pagaría a un alto precio de trabajo, despilfarro y tiranía.

LA POLEMICA DEL FRANQUISMO: LOS FALANGISTAS

Hemos dicho que la inquietud de los grupos franquistas —hoy pública ya en su forma polémica— acompaña al régimen desde su propio nacimiento. Los grupos falangistas de orientación fascista y los grupos monárquicos, de orientación tradicional o liberal —que a esas dos especies puede reducirse el conjunto— aspiraban a lo que todo grupo político aspira: informar al sistema en su ideología y gobernarlo con sus cuadros o, dicho de otro modo, tomar el poder. Porque poder no lo ha tenido nadie más que el Dictador apoyado en la institución que tenía las armas. Los grupos de ideología como los grupos de presión han tenido solamente influencia. Influencia, incluso, para participar en el poder; no para tenerlo ni para institucionarlo según el modelo preferido.

Por falta de fuerza real —y quizá de capacidad y decisión— querían y solicitaban el poder del poder mismo y sus previsiones e iniciativas eran, como hemos dicho, simples instancias. Ahora bien, el Dictador —con independencia de todo juicio de valor sobre su buena o mala fe— no podía dar lo que constituía su propia sustancia. El poder está siempre en algún sitio. Si se da no se tiene. Y como el Ejército —la base real— era demasiado neutro para tomar la decisión de transferirlo a un grupo o a otro, el Dictador ha podido conservarlo entero para sí. En tanto una dictadura es sólo dictadura, no puede conducirse de otro modo. La dictadura —poder personal— es, por esencia, lo que no puede crear institución, que es poder regulado.

(1) El «caso Grimau», al que luego me referiré más ampliamente, es una prueba extrema y trágica de lo que digo.

En efecto, lo propio de las instituciones políticas es el funcionamiento regular, previsible y limitado, pero también la capacidad de producir situaciones sucesivas y reponer titulares personales sin que las estructuras deban sufrir alteración. Lo que exige y comporta una relativización del poder y del valor de las personas que lo encarnan. Un poder personal en una situación institucionalizada es, por definición, intercambiable. La muerte del Rey es indiferente a la vigencia de la Monarquía y la renovación del Parlamento a la de la República, mientras el mero cambio de Gobierno es, en cualquiera de ellas, una anécdota secundaria.

Pedir, por lo tanto, instituciones a un dictador es pedir peras al olmo.

Incluso la institucionalización de la Dictadura en el tipo de régimen que llaman totalitario es —en principio— depreciadora del poder personal y por lo tanto dictadura no estricta. En esos modelos el dictador es colectivo: el partido o grupo político que domina el cuerpo social, lo controla y lo organiza. El grupo puede darse un dictador interno, pero ese dictador queda dentro de un círculo y por ello el círculo puede sobrevivir institucionalmente, como ha sucedido en la Unión Soviética.

El destino del grupo falangista en el sistema estaba juzgado —políticamente— por el hecho de que el Dictador no hubiese nacido de su círculo y fuese, por el contrario, una clave de arco montada sobre grupos diversos que, asociados en la guerra, aspiraban a metas distintas. Franco tomó posesión jerárquica del que le convenía asaltándolo desde fuera y obligándole a agruparse heterogéneamente con otros. Franco era, por añadidura, cabeza del poder real y armado que la guerra había puesto en el centro.

La posición del Ejército —que a raíz de la guerra impuso el desarme de las milicias y negó al partido único el derecho a conservar otros fusiles que los justos para hacer la guardia ante la Secretaría General —no fue nunca favorable al desempate ideológico, pero menos aún a la aceptación plena del modelo falangista. Si en Italia y en Alemania —donde se le dio empresa y revancha— el Ejército mantuvo su recelo frente a los sistemas que intentaban regimentar sus propios efectivos civiles envolviéndole con otro ejército politizado, en España, donde no había empresa que él —ejecutor de la guerra— no pudiese inventar por sí mismo, los recelos frente a esas formas serían cien veces mayores. ¿Podría la Falange arrollar al Ejército? Ni siquiera se le pasó por la cabeza. Debía, pues, limitarse a pedir el poder a cambio de la fidelidad. De ahí que los falangistas —cuya distancia ideológica respecto a la mentalidad conservadora y arbitrista del dictador es mayor que la de cualquier otro grupo— hayan ejercitado el fidelismo

hasta la autoanulación. Estos franquistas a la fuerza lo han sido —tienen que seguir siéndolo— a toda prueba, sin escape posible y hasta la muerte. Porque sólo Franco podría realizar sus proyectos y darles su poder, una vez que, pasado el 1939, no se habían impuesto por la fuerza. Pasado el 1945, la circunstancia internacional señaló además el receso a su capacidad de expansión.

Por estas razones, su extrema dependencia es correlativa a su aislamiento de los grupos sociales reales. No tiene nada que ofrecer a la burguesía ni puede comunicarse con el proletariado, del que se distanció para siempre en la guerra y la represión, y ni siquiera puede sostener su prestigio entre la clase media que fue su campo natural de operaciones porque ese prestigio era ideológico y lo ideológico no se sostiene a contrapelo del tiempo histórico ni soporta la prueba de un fracaso de treinta años.

La perspectiva sociológica del falangismo fue, por otra parte, anticuada e inexacta. Se perdió en el concepto tóxico del pueblo-nación al que aspiraba a controlar mediante la conquista del Estado. Embarcado en esta idea maximalista, no supo crear intereses de grupo —como los crean los otros equipos del sistema— y si muchos de sus militantes ganaron posición y fortuna fue a título privado.

Todo ello permite asegurar que, entre los movimientos interiores al sistema, el falangista es el que tiene menores posibilidades de operatividad real. El Dictador lo aprovechará sin duda —ya volveremos a ello— para contrapesar las presiones del lado contrario y quedar, como siempre, en el estado de indeterminación que la Dictadura necesita para existir. Lo utilizará y absorberá algunas de sus indicaciones formales, como siempre hizo. Lo que no es imaginable es que vuelva hacia ese frente sin base la marcha del régimen.

No nos parece necesario detallar, en toda su trayectoria, el carácter de las iniciativas falangistas. En un primer tiempo la fórmula aconsejada por él fue la de la dictadura de grupo tal como la practicaron los países totalitarios. Un poco más tarde, y a influjos de los resultados de la guerra mundial, se pusieron en primer plano sus aspectos más originales respecto del fascismo expresados en los viejos textos. Se acuña entonces la fórmula neotradicional de la democracia orgánica, que consistiría en usar el sistema representativo, sin mediación partidista, en las esferas municipal y sindical deduciendo de ahí las instituciones representativas del Estado. Paralelamente se postula una nueva atención a los problemas del sindicalismo a cuya esfera repliega el «aparato» parte de sus efectivos.

Las iniciativas que ahora surgen, no de la Secretaría General del Movimiento. —que es un centro burocrático—

sino del Círculo José Antonio, del periódico «Pueblo» o de algunos círculos juveniles, representan un cierto revisionismo. Se sigue hablando del Partido único, pero como algo muy amplio y dotado de un cierto pluralismo interno; se piensa en un Parlamento obtenido a través de representaciones democráticas locales y corporativas y se sugiere un presidencialismo, un tanto influido por el último modelo francés, con elección popular y uso de los métodos consultivos de la democracia directa. Quizá ningún falangista piensa en una conquista plena del poder para la Falange. Más bien intentan afirmarla como grupo de presión o influencia en el interior del sistema, creando plataformas que se separan ambiguamente del encuadramiento, pues se quiere distinguir entre una Falange oficial, puro instrumento de la dictadura, y una Falange «auténtica» depositaria de un proyecto ideológico nunca experimentado. Estos falangistas van asimilando sustancia izquierdista a medida que la situación en el régimen va haciéndose crítica. Sustancia en la que se traducen las aspiraciones de la izquierda histórica un día aplastada con su ayuda. Así, en general, los falangistas tienden a ver el problema español más bien como problema socioeconómico que como problema formalmente político. Más de reforma estructural que de reforma constitucional.

Ya hemos apuntado las escasas posibilidades de éxito de este grupo en su proyección sobre el sistema. La acentuación de los aspectos radicales de la ideología social a que acabamos de aludir, no favorecerán esa proyección porque el Dictador y su fuerza principal de apoyo se guían más bien por criterios conservadores, mientras los otros grupos son conservadores por definición cuando no contrariamente reaccionarios. Por otra parte, el falangismo representa los aspectos del sistema que se quieren hacer olvidar para corresponder con el mundo. En este sentido, desenvainar el falangismo esencial y renovado de la funda del falangismo experimentado y tópico es un esfuerzo que toca lo imposible. No hay que olvidar que la historia de ese falangismo tópico —el que ha conocido España durante veinticinco años— es la historia de una enorme inepticia en la que se han cumplido todas las profecías amargas de su fundador. El falangismo ha cargado con todo: desde la represión hasta la beligerancia a favor del Eje, desde la mixtificación sindical hasta el ejercicio de la censura. Hasta qué punto mucho de esto haya sido innecesario —esto es, inepto— queda demostrado por el hecho de que hayan sido los otros grupos los que, regularmente, han dirigido la política económica, de educación, de policía, sin hablar de la orientación general del Gobierno. Sólo en el Ministerio de Trabajo se han identificado durante algunos años la titularidad y la obra falangista. El falangismo ha aceptado, en

realidad, todas las responsabilidades —no sólo las suyas— y porque ha sido encerrado en ellas es el más probable de los «chivos emisarios» o expiatorios del sistema. Así se ve hoy en la trágica necesidad de defender el continuismo formal de la dictadura tratando de empujarla a la hazaña imposible de revolucionar los fundamentos sociales del país.

En rigor —y esto es un inciso que se sale de nuestro análisis— si los falangistas que forcejean por salir demasiado tarde de su contradicción, quisieran servir de verdad los aspectos más nobles de su inquietud ideológica, no tendrían ya otro camino colectivo que el de la autodisolución, ni otro camino individual que el de la autocracia, ni otra posibilidad operativa que la de preparar los caminos a la izquierda democrática genuina (histórica o nueva) que el dinamismo social del país necesita para sincerar y resolver sus conflictos ocultos.

RECTIFICACION A LA DERECHA

Las inquietudes e iniciativas del otro sector del sistema, al que podemos llamar «burgués», derechista o monárquico, tienen ciertas semejanzas con las expresadas por el sector falangista pero, siendo sin duda más superficiales y acaso por serlo, han encontrado y seguirán encontrando en su camino dificultades menos graves y están destinadas a producir efectos modificativos más apreciables.

En este como en el otro caso, se trata de instancias al poder constituido y de previsiones que sustancialmente buscan la continuidad del sistema. Pero estas instancias repercuten socialmente y el tipo de continuidad que buscan no es el mismo. Falangistas y derechistas pretenden que el pasado quede absuelto y que «los principios del 18 de julio» no sean revisados o, dicho de otro modo, que el poder no salga de los cuadros promovidos por la victoria en la guerra civil. Pero en tanto que la continuidad buscada por los falangistas es, por de pronto, la de la dictadura con su Dictador, para los cuales buscaría una base social más estable con sacrificios para el orden social dominante, la continuidad buscada por la derecha tiene por objeto la conservación de esa orden, sacrificando o relativizando para ello el poder personal establecido. Dicho de otro modo: los falangistas buscan un continuismo formal y desean institucionalizar la situación política existente mediante reformas de fondo. La derecha busca un continuismo sustancial y quiere recambios formales. Los primeros quieren formalizar el sistema como dictadura totalitaria de grupo ideológico, como democracia orgánica o directa o como presidencialismo. Los segundos quieren que el sistema se reconozca provisional y no deje de serlo, concibiéndolo como

etapa cuyo desenlace institucional deberá ser la monarquía.

Si los apuros principales del sistema son el aislamiento del cuerpo social, la carencia de instituciones, la imprevisión del futuro y la discrepancia con los sistemas dominantes en el mundo, podríamos decir que las inquietudes falangistas se mueven sobre todo en función de las dos primeras y las derechistas en la de las dos últimas. El falangismo ha querido de diversos modos lo que es imposible después de tantos años de fracaso, mixtificación y alegre aprovechamiento: hacerse representante de las necesidades populares y «reconquistar la calle». Ha intentado también lo que no podrá nunca lograr quien depende parasitariamente del poder arbitrario: hacer que el arbitrio se regule y que la situación de hecho se convierta en régimen organizado. La derecha, en cambio, pide solamente previsiones de porvenir y operaciones de mimetización con el sector liberal del mundo. Pide cosas mucho más fáciles y que, en cierto modo, se imponen por sí solas.

Si parece a primera vista que las inquietudes falangistas de orden social miran más a lo hondo y más lejos, es evidente que sus concepciones políticas se traducen en inmovilismo y que por lo tanto las aspiraciones conservadoras de la derecha resultan más prometedoras, incluso a los efectos de la transformación social del país, ya que esa transformación sería imposible con la cantidad de poder que le queda al Dictador y con la mentalidad de la que está condenado a no salir. El falangismo robustece a la dictadura reaccionaria aunque no quiera. La derecha reaccionaria la ablanda, la corrompe, la pone en contradicción, aunque no desee enmendarle socialmente la plana.

Pero todavía hay otro aspecto de la cuestión. Hemos hablado del aislamiento social del grupo falangista. Este no es el caso del complejo grupo derechista si englobamos en él al sector procedente de la Acción Católica, a cuya cabeza se encuentra el señor Martín Artajo; al Opus Dei, cuya técnica operativa le configura como genuino grupo de presión; y al grupo monárquico encabezado por un buen número de miembros del Consejo Privado del Pretendiente. E incluso al grupo carlista, aunque éste sea un grupo excéntrico que sostiene su propia utopía integral. Ese mosaico derechista —en el que no faltan rivalidades y contradicciones— es mucho más representativo que el falangista de grupos sociales concretos —religiosos y económicos— y sostiene con ellos la relación de capilaridad de que antes hemos hablado. Se alimenta por lo tanto en suelo real y recibe influjos de aspiraciones sociales reales, aunque éstas sean de un sector reducido que —en tanto se mantenga en secuestro el sector propiamente popular— es el sector que cuenta.

No hay duda de que los equipos de Acción Católica y el Opus Dei pueden respaldarse en la Iglesia —aunque ésta se reserve otras opciones— y bastaría para demostrarlo el hecho de que el nuevo nuncio de Roma haya consultado al señor Martín Artajo y al señor Ullastres antes de tomar las posiciones públicas que tanta sorpresa han causado a quienes creían más maduro el distanciamiento entre el Vaticano y el régimen español (1). Y tampoco se puede dudar de las conexiones que estos dos grupos y el grupo monárquico tienen con los círculos más influyentes de la alta burguesía, mientras los falangistas deben reducirse a un obrerismo platónico sin correspondencia posible.

Pero además, en tanto que los grupos derechistas del franquismo funcionan en un cierto tejido social, se produce, en ese tejido continuo, un desdoblamiento de su significación. No toda la base social conservadora está ya en el franquismo y por ello —con significaciones ideológicas que repiten en su discrepancia las de los grupos franquistas burgueses— existen y ganan terreno los grupos derechistas de oposición. En la medida en que las tentativas de los grupos franquistas son rechazadas por el régimen —y de algún modo en la medida en que fueran aceptadas— se aumenta, por traslado, el valor de las «mitades» opuestas, de los grupos gemelos que acampan fuera del sistema y lo hostigan. Donde fracasasen los amigos de Martín Artajo o el Opus Dei, se acreditan Gil Robles, Giménez Fernández o los jóvenes políticos que se preparan en la Acción Católica, y donde triunfen los primeros tendrán que conquistar tolerancia para los elementos católicos de la oposición. Donde fracasasen o triunfaren los monárquicos del Consejo privado, deben favorecer igualmente —aunque nadie lo quiera— a Satrustegui, al mismo Gil Robles o a los otros monárquicos exigentes. Este desdoblamiento no le es posible al falangismo porque ninguna reencarnación suya se ha podido producir fuera del sistema y la izquierda histórica no le corresponde en ningún sentido. Pero aun si ese desdoblamiento no estuviese a la vista, sería evidente que los grupos derechistas, concebidos como momentos operativos de

(1) Fueron escritas estas palabras antes de publicarse la encíclica «Pacem in Terris». Se ha comentado en todo el mundo el enorme valor de este documento del que no dudaremos en llamar «Santo Papa Juan XXIII». Representa la máxima fidelidad a la tradición esencial cristiana y el máximo ajuste con el humanismo vigenté después de las grandes revoluciones contemporáneas. Esto es, los dos valores de que ha estado más carente el catolicismo español. Pero el catolicismo español conserva otro valor —el de la fidelidad— por virtud del cual la Encíclica de Juan XXIII está destinada a operar como un terremoto. Cabe la esperanza, anticipada por la actitud de tantos clérigos jóvenes, de que el catolicismo venga a ser en España un factor progresista. De lo que no cabe duda, por de pronto, es de que la encíclica muestra severamente a los católicos un camino que no es el del franquismo cuya condenación en el texto papal resulta inocultable.

intereses y aun de instituciones duraderas, pueden sacrificar al gobierno un cierto número de personas pero están destinados a sobrevivir. Salvo que toda la clase en que descansan quedase devorada en una merceda pero no deseable ni probable hecatombe revolucionaria. Lo que es suficiente para establecer que su fidelidad actual no podrá traspasar un cierto límite.

Lo que en el aspecto de la previsión pide la derecha, en su forma más modesta, no pasa del reconocimiento de Don Juan de Borbón como pretendiente de mejor derecho con garantías de transmisión automática del poder de la Dictadura a la Corona y libertad para la propaganda de la causa. Un poco más o un poco menos exigentes, otros grupos piden la limitación —desde ahora— del poder personal a favor de una institución monárquica establecida de hecho, incluso si Franco ha de durar aún como Regente. Tal fue, según parece, el programa del «equipo» del Opus Dei a su entrada en el gobierno. Algunos, más audazmente, piden la pura y simple retirada del Dictador y la restauración de Don Juan con plenos poderes para organizar su régimen, aunque siempre como un desenlace del proceso iniciado con la guerra civil. Medidas, cualquiera de ellas, pobres, superficiales, incompletas y, si sólo dependieran de Franco, sumamente improbables. Pero éste no es el aspecto importante de la cuestión. Lo importante es que mientras el falangismo para conseguir sus pretensiones tendría que forzar al Régimen a cerrarse en sí mismo, la derecha tiene que forzarle a ser régimen abierto.

Aquí incide el otro tema de preocupación: el de la inserción de España en el movimiento general de Occidente. En términos puramente económicos la derecha española tiene y no puede no tener a Occidente por modelo, aunque tenga sobre ese modelo ideas limitadas que lo seguirían a gran distancia y con enormes reservas defensivas.

Ahora se empieza a impugnar en ciertos medios la orientación capitalista y liberal del sistema económico franquista como si fuera algo nuevo. No hay tal novedad más que en el adjetivo. Capitalismo lo ha habido en España desde que lo hay en el mundo, aunque en una versión pobre y feudalizante, con rasgos arcaicos de capitalismo preindustrial. El régimen no hizo sino congelar este sistema con intervencionismos y dirigismos de necesidad que no tenían nada que ver con los correctivos de orientación socialista que conoce el sistema en otros países. Ni siquiera la empresa para-estatal ha tenido aquí aquellas virtudes. Los frenos fueron desfavorables a la economía de competencia pero no a la economía de concentración y privilegio. Lo único nuevo es que, pese a todo, el desarrollo natural ha ido haciendo lentamente su obra de corrección, modernizando el sistema. Esto es, exigiendo el adjetivo.

Ahora bien, a cierto nivel y cuando se aplica a este terreno, la presión exterior se convierte fácilmente en presión interior. Las exigencias de liberalización se han impuesto así, tanto por la ley del desarrollo interior como porque eran condiciones para la obtención de créditos internacionales. La estabilización acometida en ese proceso de atenuación del dirigismo fue, como sabemos, iniciativa de los organismos técnicos internacionales para poder calificar a España como país solvente. En todo caso, los grupos derechistas del sistema han sido los líderes de esta política, y, a través de ella, los titulares de la confianza internacional momentánea que ha provocado.

Es inútil decir, cuando es demasiado tarde, que el sistema debió usar de su enorme concentración de poder para imponer las reformas estructurales sin las cuales el crecimiento económico de España será siempre enfermizo: la reforma de las estructuras agrarias, las nacionalizaciones básicas, la planificación de las inversiones, el control del crédito, la ampliación de los recursos de la demanda por elevación de la productividad y los salarios, etc. Lo cierto es que si nada de esto se ha hecho en veinticinco años es en gran parte porque han faltado las premisas fundamentales para ello: la presión obrera por abajo y la voluntad reformista por arriba. La presión quedó maniatada y el sector del régimen que se lamenta ahora no hizo nada por liberarla, precisamente porque había inventado la hipótesis absurda de la superación por decreto de la lucha de clases. De otra parte, la intervención estatal se tradujo en resultados monopolísticos y privilegiados que invalidaron socialmente sus realizaciones más oportunas.

Partiendo de ese estado de la cuestión, la liberalización era el sistema menos reaccionario que el Régimen podía ensayar porque, si bien es verdad que los vicios de estructura conservados lo hacen deficiente, no es menos cierto que, con los mismos vicios, el dirigismo corrompido era el más antisocial de los métodos.

Naturalmente la liberalización económica, considerada como medio de aproximación a los modelos de Occidente, exigía complementos políticos. Los grupos derechistas no han sido enteramente consecuentes en este punto, como lo demuestra el hecho de que el Opus Dei, titular de la política económica liberalizante, hubiera ofrecido un frente de resistencia integrista a las tentativas de liberalización cultural emprendida por el ministro Ruiz Giménez en 1951. Contradicción pareja a la de la vieja guardia falangista cuando, en 1962, cortó en el Congreso Sindical —por comisión del Dictador probablemente— los proyectos de reforma que hubieran conducido a una cierta organización de la presión obrera en los sindicatos. Ha debido pasar algún

tiempo y no pocos descalabros para que la exigencia de liberalización general se insinúe por fin en las preocupaciones de los grupos derechistas, sensibles al peligro de una posible y aventurada marginación del país.

EL ENIGMA MILITAR

Cada cual a su modo, los grupos políticos del franquismo han entrado en un cierto grado de colisión con el poder personalizado. Se trata de un conflicto latente que se ha hecho patente porque debajo hay algo más grave que actúa como un imperativo: la sociedad española, incluso en los grupos más beneficiados, va cobrando la tímida aprensión de que el franquismo, envejecido y aislado, no la representa y ya no le sirve. Los grupos franquistas, en consecuencia, piden mutación y cambios y —hasta donde pueden— asistencias de base. Pero fundamentalmente —dado que esas bases son pobres e inciertas y se teme la emergencia que debe desbordarlas— presentan las aspiraciones como instancias al mismo Dictador. Ahora bien, el Dictador es poder de poderes, y por lo tanto las instancias se dirigen también a su base: el Ejército. Jamás esfinge alguna ha sido tan interrogada como la esfinge militar española. Interrogada por los grupos que buscan, desde dentro, la solución. Pero también desde afuera, desde la oposición al sistema. Por ello esta cuestión del Ejército merece punto y aparte.

En estos días uno de nuestros amigos ha realizado un fino análisis sobre los condicionamientos psicológicos de Franco por virtud de la circunstancia histórica de su promoción. Franco —dice el análisis— fue promovido al poder para un fin específico: dirigir y ganar una guerra. Ahora bien, la guerra exige establecer la prelación radical de un fin y convierte en medios auxiliares todos los recursos de la política, de la economía, de la acción de masas, del pensamiento ideológico. Haber sido política de guerra —añadiremos nosotros— constituyó la médula misma del fascismo. Pero en el fascismo esa política era política *para* una guerra que debería hacerse y que, en definitiva, se convertiría en poder absoluto del grupo civil promotor. Aquí, en cambio, se trataba de una política de guerra haciéndose y el grupo era y no podía ser otro que un grupo militar. De donde el poder quedaba concentrado en el Ejército mismo. Visto en el conjunto de los grupos civiles concurrentes y desde el franquismo de base, Franco aparece, dijimos, como la clave de un arco que centra y equilibra las tensiones opuestas. Visto de más cerca y en presencia de su realidad social completa, Franco aparece en el vértice de la pirámide militar. De ahí que su equilibrio no esté a merced de una modificación de las tensiones políticas laterales. Aunque todos los grupos políticos se pusieran a una para de-

belar el poder de Franco, no lo lograrían en tanto le quedase a éste la pirámide militar intacta. Sólo ella, en rigor, es poder.

Con los años, Franco no ha sabido, querido o podido variar su composición de lugar originaria. Ha seguido haciendo la guerra, manteniendo el estado de guerra y subordinándolo todo al objetivo de mantener su victoria y de repetirla cada día. De ahí que sus opositores sigan vallendo como enemigos. Y sigan siendo juzgados en la mayor parte de los casos por tribunales militares (1). Y que las instituciones políticas sean meros auxiliares porque lo que cuenta —y a lo que él presta su mayor atención— es el instrumento ejecutivo armado. De ahí también que proyecte siempre lo interior sobre lo exterior y que nos presente a diario la guerra fría como proyección o continuación de su propia guerra, que, con desprecio de la exactitud, hace pasar como cruzada exclusivamente anticomunista. Con lo que jamás la victoria —momento de la guerra— puede trascender a la paz, ni el orden militar al orden civil.

Es imposible saber hasta qué punto el Ejército comparte la conciencia inercial y continuista del estado de guerra en que se mantiene su jefe. El Ejército es un aparato jerárquico donde las opiniones particulares cuentan poco. Muchos militares, sin duda, protestan cuando se les dice que son ellos los que tienen el poder. Su escándalo es justo porque Franco hace con el poder militar lo que el surtidor hace con el agua conducida a presión: el poder le viene del Ejército pero al llegar a él se abre como una palmera para bajar —esto es, para ejercerse— por las vertientes de un gobierno y una administración de traza civil. Sin embargo, cualquier amenaza de crisis basta para que el poder vuelva a reconocer su centro. Franco, en rigor, ha gastado casi todo su ingenio en la política de manipulación de su Ejército, tratando con una cierta negligencia todopoderosa las cuestiones planteadas por los grupos civiles asociados.

Haría falta —aunque esto sea anticipar conclusiones— que el Ejército, sus altos grados, llegasen a tener una percepción clara de su propia situación y de la situación susti-

(1) En la imprenta estas páginas, llega a nuestro conocimiento la ejecución del comunista Julián Grimau: un acto de violencia cargado de voluntad retrospectiva que confirma nuestro análisis. El hecho ha tenido graves consecuencias: ha sentado a España, otra vez, en el banquillo de los acusados por parte de la opinión mundial liberalizante acentuando su aislamiento, ha puesto en tela de juicio la buena voluntad de los grupos del sistema y ha procurado dramatizar las perspectivas del futuro. Sin embargo, no ha faltado una sorda reacción de la que resultará, al parecer, la supresión de los tribunales militares. Quizá Grimau haya sido la última víctima del franquismo y quizá su muerte ha acelerado el proceso que sus ejecutores pretendían congelar. Queda sin embargo la mancha moral incancelable.

tuyente en que viven respecto a las fuerzas de la sociedad española cuyos estratos superiores lo envuelven quizá con su adulación sin dejarles comprender el verdadero problema. Porque su misión específica —de cara a la verdadera situación de España en el mundo— es otra muy distinta y aun opuesta a la continuación de «su» guerra, cuya perpetuación se convierte en la mejor prueba de su inutilidad. Es una misión que, por el contrario, consiste en terminar y liquidar la guerra saliendo a la paz, esto es a la retirada de los andamiajes que amenazan dejar a nuestra sociedad civil tullida e inepta por falta de ejercicio.

EL AÑO 1962

Las contradicciones del sistema, dijimos, han pasado del estado latente al estado patente. Antes se manifestaban con publicidad reducida y ahora su publicidad es convenientemente amplia. Ya es un cambio importante. Pero lo significativo de esa importancia es que la nueva situación —su nuevo modo— debe considerarse como una respuesta a presiones o desafíos que ya no vienen del sistema sino de su exterior. Hasta hace un par de años las inquietudes de falangistas y derechistas eran expresiones espontáneas de su aspiración al poder y de su particular ideología, espoleadas por un estado de soledad internacional y de progresivo vaciado social. Ahora hay algo distinto y conviene analizar los acontecimientos españoles de los últimos treinta meses para saber de qué se trata.

En las postimerías del año 1961, unas hojas de encina caídas, según parece, en el cañón de una escopeta de caza determinaron un accidente que pudo costar la vida al Jefe del Estado. El incidente, trivial en apariencia, desencadenó una reacción que podría calificarse de «explosión de obviedades en cadena». Era obvio que el Jefe del Estado es un hombre mortal como todos, sobre el que trabaja el tiempo y puede trabajar el azar. Pero a veces, como dice la frase hecha «lo olvidado por sabido» no está en el primer plano de la conciencia. El accidente puso allí la simple verdad. Naturalmente, detrás de esta obviedad aparecía otra: que en rigor, no hay previsiones formales y garantizadas para impedir que a la muerte de Franco se replantee todo el sistema. Por último, se puso en evidencia la obviedad tercera: que sólo el Ejército es poder real y podrá, en consecuencia, hacerse cargo de la situación. Efectivamente, antes de entrar en el quirófano, el Dictador quiso prevenir todo lo previsible y para ello no llamó al Presidente del Consejo del Reino o de las Cortes, ni llamó al Secretario General del Partido, ni a los Ministros civiles. Llamó a los generales que controlaban las fuerzas militares y del orden público y al que, en el Ejército, ostenta el grado más alto. Se habló de discrepancias entre los gene-

rales, pero esto pertenece al mundo del rumor. De lo que no hay duda alguna es de la relación de causa a efecto que guarda el accidente de caza y el nombramiento del segundo Capitán general del Ejército para el cargo de Vicepresidente del Gobierno. El accidente puso al día la preocupación de los grupos franquistas por el problema de la sucesión y la incertidumbre que durante algún tiempo ha causado la salud de Franco explica, en buena parte, las inquietudes de esos grupos y la libertad que para expresarla se han ido permitiendo.

En la primavera de 1962 se produce el segundo acontecimiento importante, que golpea sobre un estado de conciencia ya removido: las huelgas de trabajadores que, por primera vez desde 1950 y más organizadamente que en cualquier otra ocasión, se producen como movimiento obrero generalizado.

Hemos hecho en otra ocasión el análisis de esas huelgas y no vamos a repetirlo aquí más que sumariamente. Fueron, sin duda, huelgas económicas y profesionales de carácter reivindicativo y el estudio de sus condiciones de posibilidad ha obligado a enumerar varios factores. La estabilización económica se había pagado por la clase obrera en forma de congelación de salarios, reducción de las horas extras y disminución de puestos de trabajo. Para remediar este último problema se había dado pábulo a una emigración obrera en masa hacia los países del Mercado Común: estos obreros, que vuelven o escriben a familiares o amigos, ponen ante los ojos de la masa obrera mal pagada unas imágenes de satisfacción que subrayan la insuficiencia de las remuneraciones españolas. El sector carbonífero, donde la huelga encontró su foco principal, sufre crisis, por la política oficial de precios tasados a favor de otros sectores y la acumulación de mineral sin salida. Por último, el Estado había comenzado a poner en práctica el sistema de convenios colectivos, legalizado un par de años atrás, y que exige de por sí formas genuinas de representación obrera para la negociación con los patronos. Los sindicatos no sirven para el caso y cuando algunos de los dirigentes propugnan en el Congreso Sindical las correcciones de democratización que remediarían el defecto, el proyecto aborta y el promotor principal de la medida tiene que presentar su dimisión. Las huelgas, produciéndose en esta situación, le dan la razón haciendo volar las ficciones de sindicalismo burocrático.

Con las huelgas se afirma de hecho un principio de reagrupación obrera libre. La clase obrera recobra su conciencia asociativa y demuestra que, desde las entrañas de la sociedad, se mantiene tensa su aversión al sistema. Tres datos, del mayor interés, enriquecen políticamente el significado de las huelgas: que éstas hubieran arrastrado la protección de un cierto sector de la Iglesia, que hubie-

ran sido recibidas por la clase patronal con una cierta comprensión y que terminen con satisfacción para casi todas las reivindicaciones planteadas. Hay que añadir que por primera vez todos los grupos políticos clandestinos o semi-tolerados de la oposición hacen pública su existencia en expresiones de solidaridad.

Unos meses más tarde se produce el tercer desafío. Este estará relacionado con la tensión creciente que, en los diversos grupos sociales, ha ido determinando lo que antes llamamos «presión exterior por incitación», representada por el desarrollo del Mercado Común Europeo. Cuando éste alcanza al Sector Agrícola, la presión se hace irresistible puesto que va a tocar en sus intereses al sector económico acreditado como productor principal de medios de pago exterior.

Para entonces el europeísmo ha tomado ya carta de naturaleza en España a través de una serie de actos y asociaciones. Una de éstas, la Asociación Española de Cooperación Europea, de Madrid, ha conseguido transformarse, poco a poco, en un centro discretamente politizado que agrupa y en cierto modo institucionaliza a casi todas las corrientes de opinión española que corresponden a las que ideológicamente integran, a escala internacional, el Movimiento Europeo. En 1962 la Junta directiva de la Asociación es de hecho pluripartidista y ha elegido como presidente al líder democristiano Gil Robles, que practica la oposición al Gobierno desde los comienzos del régimen. La correspondencia de esta Asociación con el Movimiento Europeo viene de lejos y ya de tiempo atrás se ha pretendido una unificación de actitudes con el Consejo Federal Español que representa en aquella organización a los exiliados españoles europeístas y democráticos. Se pretende llegar a definir el europeísmo de la oposición española de un modo unitario.

Cediendo a la presión de los grupos sociales interesados —y tras ellos a la de todos los grupos que, sin exceptuar el sector obrero, se interesan por dar solución europea al problema de España—, el Gobierno vence sus recelos reiteradamente expresados y solicita el ingreso de España en el Mercado Común. Con tal ocasión la A.E.C.E. dirige al Ministro correspondiente una comunicación expresándole su satisfacción por la iniciativa y la esperanza de que el Gobierno se apresure a realizar las transformaciones de estructura política necesarias para que la negociación sea posible en los términos de paridad que exige el interés de España.

Un poco más tarde se convoca en Munich un Congreso del Movimiento Europeo. Es la buena ocasión que esperaban los europeístas españoles del interior para reunirse con los del Consejo Federal y poder confrontar sus puntos de vista respectivos. Una tentativa para establecer esta confrontación había sido prohi-

bida por el Gobierno, un año atrás, cuando éste suspendió una Semana Europeísta convocada en Palma de Mallorca. En Munich el acuerdo es fácil y se expresa en forma de previsión, afirmando la necesidad de que España participe en la integración europea y la necesidad correlativa de transformar sus estructuras políticas en estructuras democráticas.

El Gobierno consideró este acto como una desautorización de su propuesta, pero su alarma en el fondo estaba determinada por el hecho nuevo de que la oposición española apareciera de pronto formando una figura coherente.

De la neutralización y relativa recomposición de los grupos sociales a que hemos hecho referencia, emergían ahora manifestaciones no pasivas y, tratando de interpretar sus intereses, se levantaban grupos históricos y grupos nuevos que eran capaces de convenir en la necesidad de dar traducción política al pluralismo social inocultable y podían, si se les dejaba, conducir a los grupos antagónicos a modos de oposición cooperativa, de lucha racionalizada y pacífica, de entendimiento democrático en suma. Lo que significaba una representación realista del argumento político que la escena española sólo conocía simbólicamente a través de las diferencias domesticadas de los grupos franquistas.

Las respuestas del régimen se han producido en dos tiempos y, por decirlo así, en dos tonos.

Ya hemos hablado de la respuesta dada al primer desafío —cuyo protagonista fue el azar— en forma de afirmación del instrumento militar como pieza de seguridad del sistema. Desde entonces el Ejército ha quedado desnudo en primer término y esto no puede dejar de abrir, entre sus altos grados, un proceso de reflexión.

La respuesta al desafío social de las huelgas fue, en el primer momento, elástica. Sin dejar de atribuirle, como es tópico, a maquinaciones extrañas, se procuró reducir sus consecuencias políticas. No se le ofreció un frente represivo y se permitió que, en casi todos los casos, triunfaran las reivindicaciones. En un segundo momento el Gobierno eligió «testigos» politizados para atemorizar al activismo, sometiéndolos a represión por vía judicial militar. Practicó asimismo algunas medidas gubernativas de represión sobre los grupos obreros más distinguidos. Hubo, pues, procesos y traslados de residencia. Los procesos afectaron principalmente a un grupo juvenil nuevo, el F.L.P. —radical y originariamente católico— a través del cual se quería demostrar o simbolizar la presencia de una infiltración comunista en las organizaciones de la Iglesia. Con ello quedaba conjurado el valor de la participación eclesiástica en la huelga. Más tarde esta forma de represión alcanzó también a elementos de las organizaciones obreras clásicas.

Por otro lado la reacción fue autocrítica. Se llegó a preparar una ley legalizando la huelga, se aconsejó la revisión de los salarios y se votó una ley de cogestión obrera de aplicación improbable. El Secretario de Sindicatos eliminado por su proyecto de democratización en el Congreso sindical, fue designado para un puesto de importancia. Por otro lado es indudable que los replanteamientos de la que se suele llamar «izquierda falangista» guardan estrecha relación con la situación de hecho que las huelgas pusieron en evidencia.

Inversamente, el primer tiempo de la reacción al desafío de Munich fue represivo y alarmista; quince de los ochenta asistentes fueron desterrados fuera de España o a las islas atlánticas. Se desencadenaron la injuria, la calumnia y las amenazas contra ellos. Se movilizó a las masas de base —a los falangistas— pidiendo su cabeza. Se representó a lo vivo la comedia de la indignación y el sobresalto, con llamadas de alarma y propósitos de reagrupación en la línea amenazada del 18 de julio. No todo, sin embargo, fue comedia. Era indudable que entre los grupos representados en Munich algunos tienen sus raíces —fuertes o frágiles— en el seno de los grupos o subgrupos sociales que, en un primer momento, formaron mayoritariamente la base franquista, mientras otros representaban el estrato sumergido de que hablamos en nuestro análisis. Ahora bien, el encuentro de unos y otros suponía la destrucción del esquema de la guerra civil —tal como lo sostienen Franco y, en cierto modo, el Ejército— y la negación del abuso que de ese esquema han hecho los grupos políticos franquistas cuando lo usan como argumento de monopolio en su aspiración —a causa de ello imposible— de institucionalizar y poseer un poder civil en forma de régimen. El sobresalto que podía producir el replanteamiento a fondo del problema político español, desde los supuestos reales de una sociedad pluralista, era un sobresalto genuino y no dejan dudas sobre ello ni el discurso catilinario pronunciado por el ministro de la Gobernación pocos meses más tarde ni las reacciones del «todo Madrid».

Pero el sobresalto no se agotó en la represión. Actuó como estímulo del estado latente de inquietud interna que hemos venido analizando. Esto decide el segundo tiempo de la reacción que se inicia con la reforma del Gobierno.

Esta reacción se define por varias notas, algunas mímicas, como la tentativa gubernativa de asumir el europeísmo de sus opositores y de dar a entender que la situación es abierta y va a ser evolutiva, que incluye el pluralismo y que todo ello va a expresarse por medidas de liberalización respecto a los estados de opinión del país.

NOVEDADES Y APUROS

No conviene aumentar ni disminuir el valor de verosimilitud de estas promesas. Desde el punto de vista del poder personal y en la medida en que de él dependa, sabemos que, en la práctica, tales cosas no pasarán del límite del peligro. Pero el peligro está constituido ya y desde ahora. Ante todo, automáticamente, aquellas promesas dibujan en el interior del sistema nuevas contradicciones u oposiciones, independientes, en cierto modo, de las que hemos analizado. Seguramente la frontera de escisión respecto a esos puntos no va a repetir la que separaba a los grupos franquistas definidos, sino que puede abrirse entre éstos y el mismo poder personal asistido por el bloque de sus colaboradores neutros (dejando aparte el aparato militar, en estado de enigma hasta que se vea obligado a decir su palabra). En segundo lugar, porque si se practica lo anunciado modificará la situación sustancialmente con una cierta rapidez. Pero si, por el contrario, no se practica, nadie podrá impedir que la especulación producida se traduzca en un incremento del frente de reacción contra el sistema.

Las declaraciones de europeísmo se han prodigado en todos los sectores y niveles del sistema. En rigor hoy no oponen en España una negativa frontal al europeísmo más que ciertos grupos y escritores casticistas revolucionarios y las organizaciones de extrema izquierda, y aun estas últimas con cautela.

Los recelos que inspira el Mercado Común a algunos sectores de nuestro capitalismo, que es pobre en productividad y rico en empresas retardadas, se han disuelto ante los peligros de la marginación que pueden significar algo peor que un duro esfuerzo de adaptación y trabajo. Las admoniciones que se dirigen a la clase obrera, bajo la especie de que el Mercado es una empresa de los grupos capitalistas y colonialistas, rebota en el frente de su buen sentido porque cuanto más evidente sea el carácter capitalista del Mercado Común tanto más urgente será que las bases obreras de los diversos países quemen sus barreras nacionalistas, que significan un dato moral retardatario, y apunten a la socialización de aquello que los capitalistas van creando. Porque todo, hasta la socialización, es más fácil en un bloque de 200 millones de hombres que en una parcela de 40 u 80.

Puede decirse, pues, que cuando el Gobierno se compromete al europeísmo le empuja por detrás la masa entera del país, lo cual hace difícil el retroceso. Ahora bien, el retroceso puede venir y de hecho ya se ha dejado insinuar su posibilidad. Primero, porque la Dictadura puede ser rechazada por los Gobiernos europeos; luego, porque es posible que el poder personal tema dar ese paso del

que pueden deducirse *consecuencias* parecidas a las *condiciones* que pudieran serle impuestas y que él se ha anticipado a rechazar.

Hasta ahora todos los grupos del sistema han apreciado la necesidad del ingreso en el Mercado Común. Algunos han subrayado su carácter de instancia decisiva y frágil. Todos han aceptado las declaraciones del gobierno según las cuales España no pagará su entrada en el Mercado Común al precio de una acomodación política de sus estructuras al modelo democrático. Sin embargo, basta un poco de oído para percibir que estas dos cosas —«que se quiere entrar» y que «no se aceptarán condiciones»— se dicen por unos y por otros poniendo el énfasis en una u otra frase, según el estilo de cada cual. Los grupos de derecha no ocultan su incomodidad ante la segunda proposición, que es la que suena con más fuerza en boca de Franco. Los falangistas insisten no tanto en la negativa como en la contrapropuesta. El Ejército calla pero su silencio transparente poca conformidad con la idea de un aislamiento al que el «victorismo» de Franco pudiera conducir al país. Sería grave cosa para la dictadura que sus propios sostenedores y asistentes llegaran a comprender —como se comprende desde fuera del sistema— que la apuesta no se pone entre dos conveniencias de España sino entre el interés de España y la conveniencia de un solo hombre.

Los problemas de la liberalización promueven, sin duda, menores tensiones. Avanza en el orden económico, pero, no resuelta aún en sus efectos antimonopolísticos, queda detenida siempre en el punto en que debería dar entrada al mundo del trabajo. Su transferencia al campo cultural parece tíbiamente aceptada por todos, con cautelas y frenos. Su traslado, en cambio, al orden de la opinión política es faena que nadie acaba de aceptar más que a modo de un juego en familia, con reglas y matices. Los grupos franquistas dejarían de serlo si aceptaran otros concurrentes, cuando a duras penas toleran los que tienen dentro de casa.

El proyecto de liberalización hay que entenderlo, pues, de modo restringido. Ningún grupo del régimen —por ejemplo— dejó de apoyar a su modo la reacción del gobierno frente a la reunión de Munich, que significaba la aparición de «los otros». Nadie se ha hecho cuestión de que hasta hoy mismo se sigan celebrando consejos de guerra por imputación de delitos políticos. La limitación y censura de las publicaciones, los libros, los espectáculos, las conferencias, se mantienen como norma. Ha habido —esto es todo— más holgura y mayor inteligencia en la administración de esas medidas.

La novedad, en términos concretos, debe considerarse limitada a una vigilada autorización para que el pluripar-

tidismo originario del régimen tome estado público y oficial. Los propios periódicos —en número inalterado, todos en manos seguras y bajo control— han sido autorizados a actuar como portavoces de las varias tendencias aceptadas, rompiendo con la estúpida monotonía de los años anteriores. Las manifestaciones, declaraciones, conferencias y artículos en que se hacen patentes las posiciones polémicas e incluso las instancias reformistas de los grupos que hemos analizado, constituyen el argumento de esa política y expresan su tope. Podríamos decir que se ha autorizado el comienzo de una representación con actores elegidos, papeles previsibles y escenario acotado. La sociedad española queda constituida en público, sin que pueda impedirse del todo que los actores la soliciten como juez.

No hay que pensar que todo ello constituya una vida política verdadera pero no debe negarse que encierra algún valor, incluso en función de la vida política inexpressada.

La contemplación de aquella representación, en nada parecida a la pluralidad política real, tiene, socialmente, un valor de estímulo para la conciencia general despolitizada. Aunque nadie otorgue crédito de realidad a lo representado, sucede como en el teatro: llegado un cierto punto los comportamientos reactivos se producen «como si» hubiera esa realidad. Porque el hecho mismo de representar es realidad en todo caso.

Por el contrario, un juego como éste incluye el peligro de que la parte no afligida de la sociedad se instale con regodeo en la situación del espectador divertido. Sería la conversión del pueblo en público; conversión que, en cierto modo, ha sido uno de los objetivos —y de los éxitos— permanentes de la dictadura.

Pero también puede pasar —debería pasar— que el escenario vaya recibiendo poco a poco una cierta cantidad de elementos de acción que no aceptan papeles convenidos ni se comportan del modo previsto; esto es, que se pongan a representar la realidad y no la farsa. Es algo que ya sucede —incluso sin cambio de actores— cuando se discuten temas de verdad: la situación económica o la situación social, el socialismo y el liberalismo, la monarquía o la república.

Pueden adivinarse detrás de la representación en curso los dedos manipuladores de los intereses del sistema —del poder personal— cuando la discusión sobre el porvenir del régimen y su institucionalización se pone en primer término. Entretanto haya quienes pidan un presidencialismo republicano, no están ya solos los que piden una restauración monárquica acelerada. Mientras se discuta sobre el porvenir, se asegura el presente en tanto que esa discusión no movilice fuerzas y se limite a solicitar las decisiones de quienes tienen el timón. Pero ¿esto puede durar mu-

cho? ¿No va a producir, pese a todo, estados de presión en torno a una y otra propuesta? ¿Puede el Ejército contemplar este juego con el porvenir sin terciar de algún modo?

Es evidente que lo que se discute en España en un círculo reducido y un tanto al margen de los problemas de fondo, tenderá a relacionarse con todos los problemas e interesar a círculos mayores. Ni la dictadura disfrazada de presidencialismo —la pseudo república— ni la monarquía continuista, ininteresan hoy, como soluciones «en sí». Pero dentro de esas formas cabe la proyección del cambio real. Y abrir el proceso sucesorio en un sistema cerrado, como es el español, es acercarle a su final, supuesto que la suspensión del juego o su prórroga indefinida pondría a los grupos que lo toman en serio en la necesidad de adoptar otras actitudes pasando de la instancia al hostigamiento.

Una presencia acentuada del problema internacional, un ensayo de pluralización reducida, una apertura del pleito sucesorio, no son aún verdaderos «hechos». Solamente son factores de movilidad y es pronto aún para calcular su alcance.

Lo tácticamente nuevo en la situación sigue siendo, sin duda, la presencia de un vicepresidente militar en el Gobierno, elegido en función de su grado. Durante los meses siguientes a su designación todos los grupos del sistema se han vuelto hacia esta figura como hacia la nueva clave del poder. No parece que la disminución de publicidad en torno a ella, que un poco más tarde se ha hecho notar en el protocolo y en la prensa, carezca de significación.

Pero hay otra novedad de una cierta importancia relacionada con el nombramiento del señor Fraga Iribarne para el Ministerio de Información. La importancia no está en el hombre ni siquiera en su protagonización del propósito liberalizante acordado a la nueva etapa. Manuel Fraga es, si no nos equivocamos, un hombre estudioso, dotado de ambición, oportunista, un poco tosco en sus ideas y en sus modos y asombrosamente inteligente si se le compara con su antecesor. No deja de ser un falangista, aunque de la cuerda liberal, pero tampoco deja de ser un monárquico, si bien se le atribuye parte en la invención del proyecto presidencialista. Reivindica todas las nuevas orientaciones que hemos consignado y no aparece apoyado en un sector más bien que en otro. Ello no es una ventaja; en el sistema español, cuando no se tiene raíz en algún grupo específico —y a veces aun teniéndola— se pasa a estar muy a merced del poder neutro, con peligro para las propias iniciativas. No sabemos adónde llegará en las suyas.

Por el momento, Fraga nos parece el farandulero del «Retablo de las maravillas» de Cervantes. Cosa que en la España de la pereza es oficio de éxito seguro e inmediato

aunque pasajero. Pero todo esto es secundario. Lo que hay de novedad en la designación de este propagandista del régimen, está en el hecho de que con él —no es él solo— llegan al poder hombres de una generación que parecía estar condenada a una víspera eterna. No es que la promoción sea precoz. Hacia 1937 ascendían a puestos de solemnidad hombres de 24 años. Lo sabemos por experiencia. Pero esos hombres que ocuparon los puestos entonces se han ido haciendo viejos sin sentir el deseo de ceder el sillón, y el régimen estaba desliziéndose hacia la gerontocracia. Los grupos distinguidos de esa generación que Fraga representa son el resultado de una espera larga, cumplida ante el modelo de un poder omnimodo. No es raro que entre ellos la ambición se haya condensado un tanto y se haya hecho un tanto absolutista. En los ejemplares orientados hacia el oportunismo del sistema y en los que trabajan para renovar los encuadramientos que se le oponen, hemos conocido esos talentos.

La promoción de cuasijóvenes al poder, que ahora comentamos, ha tenido una virtud removedora considerable en todo el medio de esas «generaciones a la puerta». Puede asegurarse que con ello el Régimen va a encontrarse con un nuevo elemento de presión. Nuevo en todos los sentidos, es decir también en su interior. Porque estos jóvenes son poco amigos de expresarse por solidaridad con los grupos tradicionales. No es posible que un grupo de hombres de 30 a 40 años —por lo general bien preparado, ya que ha tenido tiempo— pueda unir su destino de modo irrevocable a un régimen personalizado por un hombre que acaba de pasar el nivel medio de longevidad. Fuera del sistema, la presión será de otro tipo. Pero ni siquiera es imposible que, entre los de dentro y los de fuera, se establezca aquella especie de desdoblamiento que hemos considerado con referencia a los grupos oficiosos de definida caracterización social. Por de pronto no conviene ignorar que la proclamación de Fraga como liberalizador ha sido hecha desde los alrededores de su propia voluntad y muy particularmente por los hombres de su generación que piden expresión y paso franco.

UN DISCURSO DE FRANCO

Montada la farándula y antes de que pudieran asaltarla algunos sectores inesperados, ha sido el autor y empresario quien ha salido a escena.

La reacción personal de Franco, después de verse for-

zado a ceder de algún modo a las inquietudes de la propia base política estimulada por las presiones que hemos consignado, ha sido, por decirlo así, tradicional. En toda ocasión parecida Franco reafirma sus principios, esto es, su decisión de mantenerse en la política de guerra que es el estilo mismo de su voluntad de duración. Tal ha sido su discurso ante el Consejo Nacional de la Falange.

En principio parecía poder significar algo —en la línea de las novedades— esta convocatoria de un organismo que no se reunía para deliberar desde los años de la guerra. Celebró por entonces algunas sesiones que le sirvieron para rechazar un proyecto de Fuero del Trabajo presentado por el Gobierno y sustituirlo por otro: el Fuero cuyo aniversario ha servido de pretexto para la reunión actual. En vista de ello, durante años y años no ha vuelto a reunirse más que para escuchar a su Jefe. Las sesiones de ahora iban a ser y han sido otra vez deliberativas y hasta parece que han tenido alguna vivacidad. Las conclusiones publicadas han sido, sin embargo, de una gran pobreza. Parece que, a causa de tal escamoteo, el ex ministro católico Ruiz Giménez ha presentado su dimisión de aquella asamblea en la que era un huésped un poco extraño.

Las conclusiones en cuestión dicen que debe organizarse una asociación de cabezas de familia bajo el control del Movimiento para que «la familia» intervenga de ese modo en el orden representativo municipal. Esas asociaciones propondrán las listas de candidatos y además establecerán una policía de costumbres en los centros locales. Lo que, conocido el medio, es para que se nos abran las carnes. Dice también que hay que preocuparse de la promoción juvenil pero ante todo vigilar la ortodoxia de los educadores y maestros y convertir la rebelión de los jóvenes en energía útil a través de las turbinas del «movimiento». Dicen, por último, que hay que proseguir y acelerar la transformación del campo donde queda mucho por hacer.

Aun para los escépticos sobre los movimientos internos del régimen, las conclusiones del congreso han sido sorprendentes por su continuismo sin sustancia. Ni siquiera ha habido en tal congreso una alusión a las aspiraciones de los propios grupos franquistas tal como las hemos examinado y tal como se manifiestan en tribunas y publicaciones no encuadradas. La razón es, sin duda, que para escuchar el discurso que Franco había preparado, cualquier manifestación inquieta hubiese representado una excesiva contradicción. El discurso, en efecto, tiene el valor de un punto final o de un punto y aparte. Después de leerlo, no es posible admitir oficialmente que el régimen no tenga realidad institucional o que la situación sea provisional e insatisfactoria. Franco afirma, por el contrario, que el régimen

está perfectamente constituido y que exige, como mucho, ciertos retoques o adaptaciones.

Donde no puede afirmar con hechos que se vengán practicando formas de representación genuina, afirma el valor representativo e institucional de los organismos que algún día llegarán a practicarlas. Se afirma, una vez más, en la idea de que el sistema significa una anticipación de los modelos que convienen al mundo occidental. Se reafirma en la resistencia de su régimen a cualquier presión modificativa que venga de fuera. Se mantiene en la negativa respecto a la exigencia de otras garantías de futuro que las expresadas en su Ley de sucesión. La orientación del régimen en materia económicosocial es también impecable para él. Nada hay que revisar. El principio conservador de que las reformas sociales deberán acomodarse al ritmo de crecimiento de la renta global vale, llevado al plano político, por el principio tomado de la crítica revolucionaria según el cual sólo a un cierto nivel de desarrollo es posible la democracia representativa. Cada una de las opiniones de Franco constituye, pues, un cerrojo frente a las reclamaciones reformistas de sus propios asociados políticos.

La primera mitad del discurso está dedicada no ya a la absolución del propio pasado —que es de ritual hasta para los franquistas insatisfechos— sino a su apología. No vale la pena seguir en detalle sus afirmaciones cifradas en las que se establece la efectividad económica y social de los años anteriores. En España circulan hoy muchos libros y publicaciones donde el lector puede encontrar «el negativo» de esos datos: las cifras relativas de concentración de propiedad y monopolio, productividad, etc... Nos bastará meditar, como contraste, en algunos datos menudos: es obvio que el padre de familia español que trabaja con sus manos disfruta, sólo desde 1963, de un salario mínimo de 60 pesetas, suficiente, según declaraciones del Comisario general de Abastecimientos, para comprar los elementos que integran un «cocido ibérico». Y si este trabajador es un funcionario subalterno —un cartero— habrá de contentarse con 30 pesetas por día. Aceptado que muchos obreros ganan más, porque trabajan más o están especializados, queda siempre el dato de que al español le cuesta un kilo de pan el doble de trabajo que a un obrero italiano y un traje el doble que a un obrero francés, para no hablar de alemanes, ingleses o americanos. Respecto al ritmo seguido se calcula que la transformación racional del agro español puede cumplirse en un plazo que no bajará de los CIEN años, mientras la población rural pasa a otros sectores en una proporción del 10 por 100 cada 20 años. Esa población rural vive en municipios pequeños de entre los cuales 5.000 no tienen agua ni luz eléctrica, ni comunicaciones, ni saneamientos.

Respecto al *standing* general baste decir que en España, en 1960, recibieron socorro de la organización «Caritas» cuatro millones y cuarto de españoles.

España, dice Franco, ha salido de sus apuros por sus propios medios. Pero aparte de decir, cuando le conviene, que ese salir de apuros es hasta cierto punto, omite decir que su sistema ha recibido una ayuda directa de Norteamérica por valor de mil quinientos millones de dólares y que la balanza comercial se salda con un déficit que cubren los ingresos del turismo y las remesas de la mano de obra exportada, mientras —apenas afirmada la estabilización— explota de nuevo la corriente inflacionaria antes de llegar al reajuste de salarios. Operando sin embargo, como un economista, con macrocantidades, se puede aceptar, con Franco, que España ha comenzado su despegue y que su vida se transforma. Otra cosa sería imposible en un pueblo que está vivo y está en Europa desde el tiempo de los romanos.

Pero Franco se atribuye el crecimiento natural que la economía española ha cumplido en los últimos diez años, porque éste se ha debido, ante todo, al orden externo que él llama paz social y que, como es sabido, sólo puede llamarse así cuando brota del sistema de relación y de equilibrio entre los varios grupos sociales. No se nos dice que en España esa paz se funda en la sofocación del grupo obrero de presión y que, en todas partes, esa presión, incluida la huelga, ha sido una de las determinantes principales de la elevación de productividad en las empresas capitalistas —que son las que España tiene— y de la expansión económica. Cosa que puede establecerse sin demagogia alguna y sin salir del dominio de la ciencia económica.

Pero dejemos este aspecto de la cuestión para reducirnos a nuestro tema. El régimen vale, dice Franco, y si no vale más es porque hubo que dedicar largos años a la creación económica y a la educación del pueblo para experimentar la nueva democracia, que es la que va a producirse en el ámbito de los municipios y los sindicatos bajo el control del Movimiento Nacional. Puede haber ciertas novedades. Por ejemplo, puede usarse de nuevo el referendium, cosa conocida entre nosotros y que ahora empiezan a imitar los franceses para preguntar «sí» o «sí», como Franco lo hizo en 1947, aunque con un poco más de prensa libre, partidos libres y masas electorales auténticas. Otra novedad —ésta curiosa— puede ser el «Concejo abierto». No hay posibilidad de equivocarse sobre él, porque Franco pone ejemplos: Concejo abierto es cuando se reúne al Consejo Nacional del Movimiento para oír su discurso. También cuando, en la plaza de un pueblo, lo escucha una masa rural entreverada de policías. Se trata de un peculiarísimo ejercicio de democracia directa: él propone y define; los otros

aprueban y aclaman. La nueva institución se parece extrañamente al «rito» democrático que cumple el oficial arenando a los soldados antes de la batalla. A los soldados, claro es, no les interesa conocer los conceptos estratégicos y tácticos que se van a aplicar. Se les propone que entren en fuego y ellos entran de todo corazón. Fuera de estas novedades, todo lo que Franco ofrece en su discurso son retoques de detalle. No hay más.

Franco ignora a sus adversarios, rechaza la presión exterior, reduce o encuadra las inquietudes de sus amigos, reafirma el régimen —esto es, su poder personal— sin concesión alguna.

¿Significa esto que las realidades rechazadas o desconocidas quedan canceladas? El discurso de Franco viene a demostrar que las peticiones o inquietudes de los grupos franquistas a las que hemos prestado nuestra atención son inútiles en cuanto actúan como instancias al poder, y que éste es insensible a esas como a otras presiones. Lo que no es exactamente cierto porque, a pesar de todo, como decía Galileo, «se mueve». Lo que hay que establecer ahora es de qué y de quién puede depender que ese movimiento sea de verdad y en la dirección de un desenlace, supuesto que el discurso de Franco reafirma su voluntad fija de resistir.

LA INSTANCIA A LA SOCIEDAD

Resumamos ahora esquemáticamente. El poder personal, prisionero en su situación originaria, se esfuerza por durar prorrogando el estado de guerra que a los efectos civiles es mera provisionalidad. Los grupos asistentes al sistema intentan o postulan, sin fuerza, diferentes salidas. La esfinge militar es constantemente interrogada para que revele su secreto. Pero no tiene secreto. Como puro instrumento ejecutivo que es, necesita que los objetivos le vengan propuestos desde fuera. El Dictador, que es su jefe supremo y en esa supremacía mantiene su poder real, procura que aquellos objetivos se limiten a la conservación de una victoria que él no ha sido capaz de trascender. Los grupos desearían hacerle traspasar ese límite para que, optando por alguno de ellos, permitiese la institucionalización de un régimen de paz o, dicho de otro modo, de un poder civil. Pero, como quiera que tales grupos no ofrecen bases sociales suficientes, tendría que ser el mismo Ejército quien, desde la sombra, sostuviese el tinglado, lo que para el Ejército no significaría cambio alguno. Sólo un movimiento so-

cial amplio y profundo podría aconsejar al Ejército una retirada, que acaso apetece, a sus funciones específicas. Lo que daría por terminado el estado de guerra. Tal es el conflicto del que el franquismo por sí sólo no puede salir haciendo que el problema se remita siempre a la sociedad misma a la que él, cerrando un círculo, no permite reorganización ni manifestación alguna.

Recordemos ahora lo dicho en nuestro análisis inicial sobre el proceso de recomposición y neutralización de los grupos sociales naturales. Ahí y no en otro sitio está la base que buscamos. Pero hay que señalar que en ese espacio, a cuyos extremos se vive aún con la conciencia de clase vencedora y clase reprimida, ha cumplido el franquismo un trabajo profundo de relajación. La atomización o conversión en masa amorfa de la sociedad española ha sido una de las consecuencias más graves de su acción represiva y sustituyente. Este es uno de nuestros problemas principales.

Consecuente con su obra, el franquismo, en todas sus partes, sigue considerando a la sociedad como un colectivo casi abstracto. Para Franco y sus neutros se trata de la masa de gobernados cuyo deber es la docilidad ante el poder y la dedicación a sus asuntos particulares. Para el falangismo —víctima de la utopía ya anacrónica de que hemos hablado— la sociedad se totaliza. Los grupos de la derecha monárquica la ven como «buen pueblo», cuyas necesidades pueden ser interpretadas desde la posición de independencia benévola que sólo es posible a un monarca, esto es, un hombre que por definición vive por encima de los conflictos de intereses.

Todas estas visiones se instalan en el clima del despotismo y, en el caso más favorable, del despotismo ilustrado, que tuvo su tiempo. En el siglo XX son envilecedoras e inútiles. La sociedad no es pueblo indiferenciado ni comunidad total, sino conjunto o sistema de grupos. No interesa hablar de la sociedad, del pueblo o de la nación en grueso. Hay que hablar de realidades y éstas son los obreros, los campesinos, los empresarios de la tierra o de la industria, los burgueses y capitalistas, los profesionales, los intelectuales, el clero, el estamento militar, etc. En tanto no se cuente para hacer política con estas realidades, con los intereses que portan, con su voluntad de cooperación y convivencia, se estará siempre haciendo política insana de secuestro. Política de mero poder donde los medios se hacen fines. Es este un vicio de concepción del que el régimen franquista no podrá salir sino en la medida en que sus grupos sientan —por la vía de capilaridad que hemos mencionado— alguna suerte de correspondencia con los grupos sociales.

Nada ganaríamos si sustituyésemos una forma por otra, manteniendo el principio del secuestro, de la representación tácita, de la institución minoritaria, del despotismo en una palabra. Es inútil y nocivo intentar oponer al aparato despótico del franquismo otro aparato despótico de naturaleza distinta aunque parezca más racional y más moral. Es inútil el recurso del presidencialismo falangista e inútil el recurso monárquico. Inútiles igualmente —digámoslo también— las fórmulas de la oposición totalitaria y revolucionaria.

Por eso, aunque la sociedad española está muy desarticulada y conduce poquísima tensión espontánea, insistimos en considerar que el secreto de una evolución saludable en España está precisamente en apelar a esa sociedad, sin abstracciones, tal como ella es: a sus grupos concretos; ayudarles a definirse y comprender sus intereses en el orden en que éstos puedan ser negociables con los intereses de los grupos vecinos. Ayudarles a reconocer primero y luego a manifestar e imponer su derecho a ser tenidos en cuenta.

Todo ello exige un esfuerzo para poner en el centro de cada grupo la sal y la levadura, esto es: el microgrupo conductor y estimulante. Los microgrupos, integrados por afinidades, son los gérmenes de los partidos que, vistos de ese modo, son órganos de la sociedad tan naturales como las agrupaciones a que la dogmática del franquismo se refiere y que la práctica del franquismo ignora también. En tanto no exista ese elemento de movilidad y proyección social es difícil que nada de lo que dentro del régimen se pluraliza y se mueve sirva para nada. Difícil, incluso, que sirva para algo lo que al régimen se le opone desde fuera. Difícil, en fin, que lo segundo pueda servir-se de algún modo de lo primero sin caer en el más vil oportunismo.

En la medida en que se refieren a esos sentimientos de carencia, las agitaciones internas del régimen pueden llegar a interesar. En ellos mismos se expresa irremediablemente la idea de que un poder civil estabilizado con instituciones políticas verdaderas, de representatividad indiscutible, es incompatible con el estado de guerra. Pero lo es también con toda proyección de gabinete y minoría. La dictadura, que como vimos es sustancialmente estado de guerra, no podrá llegar nunca a la paz pero tampoco puede llegar a la base social, cuya pasividad le es necesaria. Si se quieren modificar las estructuras básicas del país o si solamente se quieren remover las estructuras políticas, hay que acabar con el sistema de poderes rígidos y dar libertad a un sistema de fuerzas que, desde los intereses sociales reales, puedan exigir estas modificaciones. Pe-

dirías por gracia es esfuerzo inútil y los grupos franquistas se estrellarán —si en sus actitudes hay algo más que histrionismo de teatro— contra lo imposible. Los grupos católicos comprometerán más y más a la Iglesia, cuya política en el mundo es ya otra muy distinta. Los monárquicos consumarán el descrédito de una institución que aun ayer mismo era aceptada como recurso incluso por muchos que la rehusaban como principio. Los falangistas no harán más que completar el expediente de su proceso. En tanto no se sienta que es la sociedad española misma quien presiona no se producirán los estados de reflexión y decisión en el punto en que deben producirse: en la base ejecutiva misma donde el poder personal se sostiene.

Hoy hay que dejar al franquismo en sus esfuerzos por la reconversión, sin despreciar esos esfuerzos, y llevar la atención a lo que importa: la promoción de impulsos en la base «social» de todos los grupos o de los más importantes. Y esto no puede hacerse desde el franquismo político ni limitándose a emplear los centros ideológicos discrepantes como instrumentos de recriminación o como utopías de recambio, mágicamente confiadas en su propio valor.

Nada se hará en España en tanto los obreros y los patronos, los intelectuales y los hombres de religión, los campesinos y los técnicos no sientan y «vivan» que la política no puede ser algo que se hace sobre ellos y por fuera de ellos sino el resultado de sus propias fuerzas puestas en movimiento y de su responsabilidad asumida.

Pero hay un problema previo: no hay trabajo sin dirección, ni movimiento sin eje de marcha. Los grupos franquistas no saben dónde quieren ir porque su oportunismo les impide clarificar el modelo de sus aspiraciones que, en definitiva, se consumen en la persecución del medio que es el poder. Sería quimérico intentar poner un movimiento social de presión detrás de un clima de tales vaguedades. Pero tampoco ha servido hasta ahora el motivo de la simple oposición al sistema porque también ahí ha habido vaguedades. Para marchar hay que elegir destino, preferir modelo. Parece sensato elegir por el análisis de las aspiraciones concretas del tipo más generalizado y no por el capricho ideológico de los místicos de la rebelión. Esas aspiraciones, cuando se analizan honradamente, son en España las que corresponden al modelo europeo o más genéricamente a las sociedades evolucionadas de Occidente: las aspiraciones a la prosperidad, la satisfacción y la libertad en el estado de Derecho. Ahora bien, tales cosas no tienen sentido sin el desarrollo de la conciencia democrática del país. Ni los franquistas de varia especie ni algunos de los antifranquistas están de acuerdo con esto y tal desacuerdo es una de las razones que retrasan la toma de conciencia de la sociedad española.

El empeño concreto, inmediato, de las personas que sienten inquietud y responsabilidad política debe ser el de irradiar o promover conciencia democrática en el interior de los grupos sociales a que pertenecen. Sólo eso en España puede conducir a una oposición positiva.

La aceptación de un modelo político sin ambigüedad alguna es la tarea de los grupos ideológicos que deben hablar en representación de los grupos sociales. Para estos grupos la clarificación es y debe ser una tarea conducente a la acción. Pero los que buscan acción turbia e indefinida no hacen sino esterilizar el instrumento. La coordinación del mosaico ideológico del país por referencia al modelo democrático es algo que tiene en el presente dificultades indudables, pero es algo que se debe lograr si se quiere salir de la ambigüedad que en los últimos momentos del sistema nos amenaza a todos.

Quedan las resistencias y, lo que es peor, las resistencias que empiezan a ser elásticas. En la actitud misma del régimen va implícito el testimonio de una especie de ley de necesidad que reclama la democratización del país. Es la ley por la cual el modelo más generalizado de un «continuo» cultural tiende a extenderse por todas las partes del conjunto e incluso a trascenderlo para universalizarse. El mismo Franco ha tenido que hacer, en su discurso, una apología de la democracia y habría que saber cuánto viene perjudicando a esa idea la devolvadura con que el régimen se presenta como una de sus variantes posibles. También los grupos falangistas dicen perseguir el esquema de una democracia como imagen final de sus aspiraciones. Más reservados, ni niegan ni otorgan los grupos derechistas, anclados en el punto de la liberalización. Pero no hay que olvidar que en todos esos casos se acepta para rehuir. Está claro que la simple liberalización, si fuera efectiva, barrería al poder personal y a todos sus satélites. Por ello se habla de una especie de democracia particularísima que consistiría en otorgar a la base social una opción para elegir entre propuestas prefabricadas. Ya hemos hablado bastante de ello y hemos visto cómo la reagrupación política exterior al sistema, en cuanto niega valor al resultado de la guerra civil, determina en los grupos franquistas una reacción defensiva al estilo de la vivida en junio del pasado año.

Las otras dificultades vienen del costado opuesto: no todo el antifranquismo, no todos los cuadros empleados en revitalizar la conciencia de nuestra sociedad, se inspiran en el modelo democrático ni apetecen la operación como resultado de la responsabilización de todos los grupos sociales. Para esos objetantes la tarea de transformar el sistema debe corresponder en exclusivo al grupo social obre-

ro y su modelo inspirador supone una u otra forma de dictadura revolucionaria, lo que comporta además la marginación de España respecto al Occidente. La democratización de los grupos no obreros no es para ellos necesaria ni conveniente o, si lo fuera, lo sería de modo transitorio.

La cosa es grave porque en el dinamismo de los grupos sociales hay siempre interacción y con frecuencia interacción reactiva. Así, por ejemplo, durante las huelgas de primavera, conducidos por los obreros con una cordura y un estilo de madurez admirables, conocimos a muchos patronos que empezaban a considerar con simpatía el sistema de competición libre entre los grupos sociales y a someter a crítica el sistema de represión defensiva que irresponsabiliza a todos e, impidiendo el conflicto, impide también la cooperación. Dicho de otro modo: la lucha abierta con reglas aceptadas les parecía menos peligrosa que las tensiones reprimidas con las que, el día de la explosión, no cabe acuerdo. Pero hubiera bastado que las huelgas aparecieran titularizadas por una ideología extrema para verlos otra vez buscando el amparo de las bayonetas. Por eso el régimen se esforzó, a posteriori y contra toda verdad, en buscar y presentar responsables políticos de signo revolucionario.

La politización no democrática tiende a dividir a ciertos grupos, como el intelectual, y a retrasar el acceso de los grupos burgueses a la autonomía de la responsabilidad y el riesgo. Con ello puede hacer durar la situación porque entre el extremismo y el Dictador —ya es una idea obvia— hay una cooperación involuntaria, independiente de la sinceridad con que el primero dirige su combate antifranquista y de la brutalidad con que el segundo reprime a su antagonista preferido. Para la dictadura el objetivo inmediato exclusivo es durar, retener la victoria. Para el extremismo, esa duración podría ser ventajosa, porque la habilitación de un solo grupo social como protagonista de su propia liberación es un objetivo de ciclo largo y entretanto se va acumulando carga explosiva.

Si se trata de salir hacia el modelo democrático —sólo en el modelo democrático se puede acceder a la empresa europea y a las probables satisfacciones que propone— la democratización no puede excluir a grupo social alguno y ha de consistir en una preparación de todos para la cooperación en el conflicto natural de los intereses; esto es, para la convivencia en una lucha regulada con treguas constructivas.

El régimen ha sometido hasta ahora a la comunidad española al más terrible desentrenamiento para tal tipo

de vida y procurará hacerla persistir en tal estado si, como parece, sus posibilidades de evolución se limitan al ensayo escénico de una pluralidad en un círculo limitado y nada representativo. Pero también para la oposición hay apuro pues aquel desentrenamiento reduce por fuerza el campo de ejercitación necesario para comunicar ese tipo de conducta a todo el cuerpo social. Es tarea, como dijimos, de grupos promotores y galvanizadores, de cuadros ideológicamente cargados y definidos. De cuadros intercomunicados y compensados capaces de formar conjunto y —llegado el momento— capaces de combatir.

Nos hemos preguntado con frecuencia si la formación de ese conjunto, capaz de sectorizarse y actuar como levadura de los grupos sociales concretos, e incluso de penetrar las instituciones de peso real, puede ser obra de unos partidos declarados o ha de preceder, en cierto modo, a la modulación o especificación que los partidos representan. No hay duda de que, sea cual fuere el modelo a emplear, habrá que homogeneizar ese conjunto, usándolo genéricamente como instrumento para la promoción de una mentalidad democrática. Lo otro —la elección de la variante de contenido y del tipo específico a que deba aspirarse en la vida democrática— parece más bien asunto del futuro que urgencia del momento.

Hay sin duda en España hombres en número suficiente y en todos los sectores, impregnados de inquietud política, avergonzados del sistema que deben soportar y orientados por la aspiración de obtener para España una variante adecuada del modelo democrático y hacerla salir de su estrechez defensiva para vivir solidariamente en un mundo cuyo proceso de transformación es incitante. Un buen número de esos hombres se sienten hombres de partido. Otros muchos no se sienten expresados por las ideologías especificadas que vienen del pasado o han ido declarándose después. Sólo un «continuo» democrático puede asimilar a estos hombres sueltos y convertirlos en piezas útiles para el trabajo de transformación ambiental en el que conviene fundamentar la operación política de presión. Por otra parte, los partidos de mayor tradición o más necesarios como instrumentos de la democracia futura tienen dificultades policíacas y de otros órdenes para tomar posesión de sus bases potenciales. Esa toma de posesión se haría con más facilidad a través de ese continuo o conjunto de que hablamos, que además facilitaría su actualización ideológica. De cómo pueda formarse ese «continuo» no hay por qué hablar aquí. En principio, y dadas las características de la situación española, tendrá que ser la empresa de unos pocos hombres significativos porque entre las varias aperturas que el sistema ofrece no parece incluirse la de celebrar asambleas.

La «socialización» del elemento de presión concreta se relaciona con la mayor o menor formalización y apertura de cada grupo social. Esto no es difícil —en cierto modo se produce con espontaneidad— en la clase obrera y en el seno de la clase intelectual, a través del esclarecimiento de los propios intereses y de la propia función en el conjunto de la sociedad. En otros casos la tarea será más difícil, pero exigirá siempre las mismas referencias. Es esencialmente otra que la toma de posición ideológica o partidista. Es tarea previa y, en cierto modo, consecuente puesto que sólo los hombres «de compromiso» pueden estimularla. En todo caso es tarea que no admite recambio. O se cumple o no habrá evolución en España: quiero decir evolución previsible.

La fluidez de la situación, el montaje de un tablado de representación entre imaginaria y real —el sistema con su derecha y su izquierda— comporta una oportunidad que se consumirá vanamente o desembocará en lo imprevisible si no se articula frente a ella un sistema de presión social que, como ya ha demostrado la experiencia, puede sincerar lo que es simulación, obligar al sistema a nuevas mutaciones y preparar la alternativa para un desenlace racional del proceso iniciado. O dicho de otro modo y volviendo a nuestra metáfora del tablado: los cuadros de promoción de la mentalidad y el modelo democrático tienen que asaltar el escenario dispuesto para otra cosa, lo cual exige su organización efectiva. Porque sería España el primer lugar del mundo donde los que tienen el poder lo cedan sin que nadie se lo exija o donde la historia avance sin proyectos humanos.

El régimen vive al día, apoyado en la confusión de los fines, y sus medios son por ello turbios. Sólo la clarificación de los fines puede disolver la ambigüedad de los medios. Cuando los falangistas discrepantes dicen que hace falta refundir las estructuras socioeconómicas, dicen verdad: pero tales refundiciones no son posibles donde reina la corrupción. Exigen un encuadramiento democrático, con las presiones en su sitio. Cuando los monárquicos piden estabilidad y previsiones, dicen lo que hace falta, pero tales cosas no serán verdaderas donde reine el culto más ciego al poder inmediato sino donde pueda constituirse un sistema de fuerzas coherentes. Cuando unos y otros dicen que España debe estar en órbita con los países europeos, dicen lo que todo el mundo apetece. Pero eso exige aceptar un modelo sin ambages. Cuando, en fin, la oposición afirma que Franco debe ser sustituido, expresa la más viva necesidad del país. Pero se emplaza y compromete a montar un sistema de previsiones claras con métodos adecuados. La cuestión está abierta y es de peso.

INDICE

	Pág.
Estructura del franquismo	3
Las presiones del tiempo	6
La polémica del franquismo : los falangistas	11
Rectificaciones a la derecha	15
El enigma militar	20
El año 1962	22
Novedades y apuros	27
Un discurso de Franco	31
La instancia a la sociedad	35

CENTRO DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS

42, rue Pasquier, Paris 8°